



# Asamblea General

Distr. general  
27 de febrero de 2012  
Español  
Original: inglés

---

## Sexagésimo sexto período de sesiones

Tema 134 del programa

### Presupuesto por programas para el bienio 2012-2013

## **Examen amplio de los planes de pensiones de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y los magistrados del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda**

### **Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto**

#### **I. Introducción**

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha analizado el informe del Secretario General sobre el examen amplio de los planes de pensiones de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y los magistrados del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (A/66/617). En el curso de su examen del informe, la Comisión se reunió con representantes del Secretario General, que proporcionaron información adicional y aclaraciones.

2. El informe del Secretario General se presentó de conformidad con la resolución 65/258 de la Asamblea General, en la que la Asamblea tomó nota de que en el sexagésimo sexto período de sesiones se realizaría un examen de las prestaciones de pensión de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales, que incluiría opciones de planes de pensiones con prestaciones definidas y con aportaciones definidas; decidió examinar en ese período de sesiones los planes de pensión de las personas afectadas; y pidió al Secretario General que propusiera en su informe un mecanismo que se pudiera utilizar para determinar las prestaciones de jubilación teniendo en cuenta los derechos de pensión adquiridos antes de prestar servicios en la Corte Internacional o en los Tribunales.



## II. Antecedentes

3. En los párrafos 3 a 18 de su informe, el Secretario General proporciona información sobre los antecedentes y la evolución de las prestaciones de pensión pagaderas a los miembros de la Corte Internacional de Justicia y a los magistrados de los dos Tribunales. La Comisión Consultiva observa en particular que, de conformidad con el Artículo 32, párrafo 7, del Estatuto de la Corte, los miembros de la Corte tienen derecho a recibir una pensión de jubilación y que las prestaciones de pensión de los magistrados de los dos Tribunales están basadas en las de los magistrados de la Corte, prorrateadas para tener en cuenta la diferencia en la duración de sus mandatos (A/53/7/Add.6, párr. 29). La Comisión observa además que, según se indica en el párrafo 15 del informe del Secretario General, la Asamblea General es la única autoridad que puede determinar las condiciones de servicio y las prestaciones del régimen de pensiones de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales.

## III. Prestaciones de jubilación que reciben en la actualidad los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales

4. Las prestaciones de jubilación que reciben en la actualidad los miembros de la Corte Internacional de Justicia y los magistrados de los dos Tribunales (sin contar los magistrados *ad litem*, que no tienen derecho a ellas) se resumen en el cuadro 1 del informe del Secretario General. Básicamente, de conformidad con el plan de prestaciones definidas existente, las personas afectadas tienen derecho a una prestación de jubilación equivalente al 50% de su sueldo básico neto anual (sin incluir el ajuste por lugar de destino), prorrateado en caso de tener menos de nueve años de servicio, más 0,154% del sueldo básico neto por cada mes de servicio después de los 108 primeros meses. Tomando como base el sueldo básico neto actual de los magistrados, que es de 170.080 dólares, la prestación mínima pagadera después de nueve años de servicio es de 85.040 dólares. En caso de jubilación anticipada (antes de cumplir los 60 años) se aplica una reducción del 0,5% por mes y, después de la jubilación, se efectúan ajustes por costo de la vida al mismo tiempo que se revisa el sueldo básico y se aplica el mismo porcentaje. El plan de pensiones es no contributivo e incluye prestaciones para el cónyuge supérstite y para los hijos a cargo, así como una prestación de discapacidad. Como se indica en el párrafo 53 del informe del Secretario General, el plan de pensiones actual es un sistema de acumulación en dos niveles, con una tasa de acumulación anual del 5,56% en los primeros nueve años de servicio, seguida a partir de este punto por una tasa de acumulación anual del 1,85%, sin superar un porcentaje máximo de prestaciones del 66,67% del último sueldo. La Comisión Consultiva observa que, según se indica en el informe, por lo general los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales asumen el cargo con una edad media de 58 años y suelen prestar servicios entre 9 y 10 años. La mayoría están casados y algunos todavía tienen hijos a cargo (A/66/617, párrs. 29 y 37).

5. En el cuadro 3 del informe del Secretario General se comparan las prestaciones de pensión que perciben actualmente los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales y las de los magistrados que prestan servicios en una serie de tribunales supremos e internacionales. La Comisión Consultiva observa que los

tribunales más comparables son los de carácter multinacional, a saber, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Sobre la base de las tasas de sustitución aplicables y asumiendo que a) el sueldo básico neto de los magistrados de esos tribunales en el momento de la jubilación sea idéntico al de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y los magistrados de los Tribunales (es decir, 170.080 dólares), b) que hayan prestado servicios durante un mandato de nueve años, y c) que hayan llegado a la edad de jubilación aplicable, dichos magistrados recibirían una pensión anual de 65.408 dólares, 30.600 dólares y 21.250 dólares, respectivamente. A ese respecto, la Comisión observa que las cifras presentadas por el Secretario General son meramente ilustrativas, ya que el monto de las prestaciones reales varía en función de los sueldos abonados por los tribunales en cuestión.

6. Como se indica en el párrafo 28 del informe del Secretario General, las prestaciones de jubilación de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales no están financiadas previamente. Los pagos a los jubilados y beneficiarios proceden del presupuesto bienal prorrateado de cada órgano con cargo a los ingresos corrientes. En el cuadro 2 del informe del Secretario General figuran las obligaciones correspondientes a las prestaciones previstas por cada órgano, incluidas las de los jubilados y beneficiarios actuales (61 personas en total), información que se reproduce en el cuadro 1 a continuación.

Cuadro 1

**Obligaciones correspondientes a las prestaciones previstas**

(Al 31 de diciembre de 2010)

	<i>Corte Internacional de Justicia</i>	<i>Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia</i>	<i>Tribunal Penal Internacional para Rwanda</i>
Magistrados en activo	17 043 698	13 196 783	10 279 979
Futuros magistrados <sup>a</sup>	29 835 105	—	—
Magistrados jubilados/Beneficiarios	18 433 397	9 808 982	7 988 451
<b>Obligaciones totales</b>	<b>65 312 200</b>	<b>23 005 765</b>	<b>18 268 430</b>

<sup>a</sup> Se incluyen los nuevos magistrados que está previsto nombrar en los próximos 30 años.

## IV. Examen amplio

### *Metodología*

7. Respecto del examen amplio, la Comisión Consultiva observa que, según se indica en los párrafos 22 a 24 del informe del Secretario General, atendiendo la petición formulada por la Asamblea General en los párrafos 4 y 5 de su resolución 65/258, el Secretario General ha aprovechado la pericia existente en las Naciones Unidas para realizar el examen amplio de los planes de pensiones. Se estableció un grupo de trabajo integrado por representantes de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la Corte y los Tribunales para llevar a cabo un estudio exhaustivo de las opciones relativas a los planes de jubilación. La Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General también aportó sus conocimientos financieros.

Dado que la Caja Común de Pensiones no contaba con los recursos humanos internos necesarios para poder encargarse del estudio actuarial, se contrataron para ello los servicios de los actuarios de la Caja Común de Pensiones, Buck Consultants, Inc. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que los honorarios de los actuarios habían ascendido a 60.000 dólares. La metodología utilizada para la realización del examen amplio se explica en los párrafos 32 y 33 del informe del Secretario General.

*Resultados: opciones para el modelo de las prestaciones del régimen de pensiones*

8. El Secretario General presenta en su informe cuatro opciones diferentes para el modelo de las prestaciones del régimen de pensiones. Las características de cada una de ellas se resumen a continuación en los párrafos 9 a 12.

9. La primera opción descrita por el Secretario General (opción A) es un plan de prestaciones definidas, que ofrecería una prestación periódica definida tras la jubilación, garantizada durante toda la vida del afiliado, que se determinaría previamente con una fórmula basada en el historial de ingresos del empleado, los años de servicio y la edad, en vez de depender del rendimiento de las inversiones. La fórmula más utilizada para el cálculo, conocida como la “tasa de sustitución”, se basa en los ingresos finales del empleado. Como se indica en el párrafo 5 *supra*, en el cuadro 3 del informe del Secretario General se comparan las tasas de sustitución para los magistrados de distintos tribunales supremos e internacionales que se jubilen después de nueve años de servicio. El Secretario General observa, en particular, que las prestaciones de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales, equivalentes al 50% de su sueldo final, son superiores al promedio. En el cuadro 4 del informe se comparan las tasas de acumulación vigentes para las pensiones de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales (5,56% para los nueve primeros años y 1,85% posteriormente) con las que se aplican a los magistrados de otros tribunales supremos e internacionales (A/66/617, párrs. 34 a 41).

10. La segunda opción examinada por el Secretario General (opción B) es un plan de aportaciones definidas que crearía un saldo de cuenta, el cual devengaría intereses tanto antes como después de la jubilación sobre la base de las ganancias reales de las inversiones subyacentes. La cuantía de las prestaciones con arreglo a ese plan estaría directamente ligada no solo al monto de las aportaciones realizadas, sino también a la duración del plazo de inversión de los fondos. El efecto de los intereses compuestos solo constituiría un factor de crecimiento importante a lo largo de un plazo de tiempo prolongado. En el cuadro 5 del informe del Secretario General se muestran algunos modelos de tasas de aportaciones fijas y tasas de acumulación anual equivalentes que cabría esperar sobre la base de un plan de aportaciones definidas y distintos supuestos de rentabilidad de las inversiones (*ibid.*, párrs. 42 a 48).

11. La tercera opción propuesta por el Secretario General (opción C) consiste en el pago de una suma global a los magistrados que se jubilen en lugar de ofrecerles prestaciones de pensión. A fin de determinar la cuantía adecuada de esa suma global, se puede aplicar bien un plan de saldo en efectivo o bien un plan de pensiones basado en activos financieros (*ibid.*, párrs. 49 a 52).

12. Por último, la cuarta opción presentada por el Secretario General (opción D) consiste en el mantenimiento de la situación actual, es decir seguir utilizando el plan de prestación de pensiones descrito en el párrafo 4 *supra* (*ibid.*, párrs. 53 a 55).

13. En su informe, el Secretario General menciona las posibles desventajas de algunas de esas opciones como modelo para las prestaciones del régimen de pensiones. Por ejemplo, la opción B, el plan de aportaciones definidas, exige una financiación anticipada al contrario que el plan de pensiones actual. El Secretario General también indica que se necesitarían ciertas disposiciones administrativas adicionales para la gestión de un plan de aportaciones definidas. Respecto de la opción C, el pago de una suma global, según el párrafo 52 del informe, su adopción supondría la abolición de la pensión actual a cambio de un pago único. En opinión del Secretario General sería difícil reconciliar ese enfoque con el Artículo 32, párrafo 7, del Estatuto de la Corte y, por extensión, con los artículos 13 *bis* y 12 *bis* de los Estatutos respectivos de los dos Tribunales, en los que se otorga a los miembros de la Corte y a los magistrados de los Tribunales el derecho a una pensión. La Comisión Consultiva toma nota también de las opiniones expresadas en los párrafos 54 y 59 del informe del Secretario General.

14. Tras su examen del informe del Secretario General, se proporcionó a la Comisión Consultiva una copia de la versión anticipada de un documento de la Corte Internacional de Justicia que contiene las opiniones y observaciones detalladas de los miembros de la Corte sobre las cuestiones planteadas por el Secretario General. Según se informó a la Comisión, la Corte tiene previsto distribuir dicho documento al Presidente y los miembros de la Asamblea General.

#### *Recomendación del Secretario General*

15. En la sección VI del informe del Secretario General figura su recomendación sobre el plan de pensiones de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales. En su opinión, sobre la base de las conclusiones del examen actuarial y teniendo presentes las relativas desventajas de algunas de las opciones (véanse párr. 13 *supra* y A/66/617, párr. 57), la adopción del plan de prestaciones definidas (opción A) podría ser una solución apropiada. El Secretario General indica en el párrafo 58 de su informe que la principal ventaja de esa opción sería la sustitución del actual sistema de acumulación en dos niveles (véase párr. 4 *supra*) por un sistema de acumulación lineal del 3,7% anual durante 18 años y nada en los años subsiguientes. Esto se traduciría en una reducción de la cotización inicial, ya que la cuantía de la pensión que los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales percibirían por los primeros nueve años de servicio sería menor, y en la reducción de las obligaciones generales de los Estados Miembros. Según el Secretario General, ello podría alentar también la permanencia en el servicio durante un período más largo, con la consiguiente reducción del período de desembolso de las prestaciones, suponiendo que la edad media de contratación se mantuviera en 58 años. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que, si la Asamblea General decidiera hacer suya la recomendación del Secretario General, los nuevos miembros de la Corte que se jubilaran al llegar a la edad de jubilación de 60 años después de haber prestado servicios durante un mandato de nueve años recibirían una pensión anual de 56.637 dólares, suponiendo que su sueldo básico neto en el momento de la jubilación fuera de 170.080 dólares.

16. La Comisión Consultiva observa que en el párrafo 60 de su informe el Secretario General propone que el nuevo plan de pensiones se aplique únicamente a los nuevos miembros de la Corte, dado que en el Artículo 32, párrafo 5, del Estatuto de la Corte se estipula que los sueldos, estipendios y remuneraciones de los miembros de la Corte no podrán ser disminuidos durante el período que ocupen el cargo. La Comisión observa también que, aunque esa disposición se aplica asimismo a los magistrados del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda en virtud de los artículos 13 *bis* y 12 *bis* de sus respectivos estatutos, teniendo en cuenta la inminente conclusión de los mandatos de esos Tribunales, es muy poco probable que se elija a ningún nuevo magistrado permanente que llegue a adquirir el derecho a una pensión tras ejercer sus funciones durante más de tres años consecutivos (A/66/617, párr. 18).

17. No obstante, en el párrafo 18 de su informe el Secretario General plantea la cuestión de la aplicabilidad del plan de pensiones a los magistrados del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales. En particular, señala que el Presidente del Mecanismo Residual podría desempeñar dos funciones diferentes al ocupar también la presidencia de uno de los dos Tribunales y que, por tanto, si se revisara el plan de pensiones actual, podrían aplicarse dos reglamentos diferentes al mismo magistrado, en su calidad de Presidente del Mecanismo Residual y de Presidente de uno de los Tribunales. Por esa y otras razones que se enumeran en el párrafo 18 del informe, el Secretario General afirma que quizá sea más eficiente que el Mecanismo Residual y los Tribunales queden totalmente excluidos del plan de pensiones revisado. A ese respecto, la Comisión Consultiva recuerda que, de conformidad con el artículo 8, párrafo 4, del Estatuto del Mecanismo Residual, los términos y condiciones del Presidente del Mecanismo serán los de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión de que, si el nuevo Presidente del Mecanismo Residual fuera elegido entre los actuales magistrados permanentes de los Tribunales y se le permitiera mantener la relación contractual existente con las Naciones Unidas, también tendría derecho a mantener las condiciones de servicio iniciales. Eso significaría que, de conformidad con el Artículo 32, párrafo 5, del Estatuto de la Corte, no se le aplicaría ningún cambio del plan de pensiones que implicara una reducción de sus prestaciones.

18. En caso de que la Asamblea General haga suya la recomendación descrita en el párrafo 15 *supra*, el monto estimado de las obligaciones para sufragar las prestaciones de los nuevos magistrados que está previsto nombrar en los próximos 30 años se reduciría en 9.964.925 dólares, con lo que pasaría de 29.835.105 dólares a 19.870.180 dólares. Por otro lado, si se aplicara una tasa de acumulación lineal se reduciría el costo actuarial de la financiación de las prestaciones de jubilación en un período de 10 años, que pasaría del nivel actual, alrededor del 66% del sueldo básico de los magistrados, a situarse en el 44% aproximadamente (A/66/617, párr. 58). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que el costo actuarial por afiliado se reduciría de 112.253 dólares a 74.834 dólares, lo que supondría un ahorro anual de 37.419 dólares por afiliado. También se proporcionó a la Comisión, a solicitud de esta, el siguiente cuadro, en el que se presenta la cuantía de las obligaciones para sufragar las prestaciones previstas por órgano, incluidas las de los jubilados y beneficiarios actuales, asumiendo que se aplicara el enfoque lineal recomendado por el Secretario General en la forma propuesta, es decir, únicamente a los nuevos magistrados.

## Cuadro 2

**Cuantía de las obligaciones para sufragar las prestaciones previstas si se aplica la opción A únicamente a los nuevos magistrados**

(Al 31 de diciembre de 2010)

	<i>Corte Internacional de Justicia</i>	<i>Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia</i>	<i>Tribunal Penal Internacional para Rwanda</i>
Magistrados en activo	17 043 698	13 196 783	10 279 979
Futuros magistrados <sup>a</sup>	19 870 180	–	–
Magistrados jubilados/Beneficiarios	18 433 397	9 808 982	7 988 451
<b>Obligaciones totales</b>	<b>55 347 275</b>	<b>23 005 765</b>	<b>18 268 430</b>
<b>Reducción de las obligaciones en comparación con el plan actual</b>	<b>9 964 925</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

<sup>a</sup> Se incluyen los nuevos magistrados que está previsto nombrar en los próximos 30 años.*Otros supuestos y elementos de comparación*

19. A petición de la Comisión Consultiva, se facilitó a la misma el siguiente cuadro en el que se indican las obligaciones correspondientes a las prestaciones previstas desglosadas por órgano, incluidos los jubilados y beneficiarios actuales, si la tasa de acumulación lineal recomendada por el Secretario General se aplicara tanto a los nuevos magistrados como a los magistrados actualmente en activo.

## Cuadro 3

**Obligaciones correspondientes a las prestaciones previstas en el supuesto de que la opción A se aplique por igual a los nuevos magistrados y a los magistrados en activo**

(Al 31 de diciembre de 2010)

	<i>Corte Internacional de Justicia</i>	<i>Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia</i>	<i>Tribunal Penal Internacional para Rwanda</i>
Magistrados en activo	14 977 701	12 505 128	9 760 275
Futuros magistrados <sup>a</sup>	19 870 180	–	–
Magistrados jubilados/Beneficiarios	18 433 397	9 808 982	7 988 451
<b>Obligaciones totales</b>	<b>53 281 278</b>	<b>22 314 110</b>	<b>17 748 726</b>
<b>Reducción de las obligaciones en comparación con el plan actual</b>	<b>12 030 922</b>	<b>691 655</b>	<b>519 704</b>

<sup>a</sup> Se incluyen los nuevos magistrados que está previsto nombrar en los próximos 30 años.

20. Durante su examen del informe del Secretario General, la Comisión Consultiva preguntó si aumentar de 60 a 65 años la edad de jubilación para los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales reduciría las obligaciones. En respuesta, se informó a la Comisión de que, en los últimos 20 años, ningún magistrado se había jubilado antes de cumplir 60 años y solo cuatro magistrados se habían jubilado antes

de cumplir 65 años. Por consiguiente, las economías actuariales resultantes de la introducción de deducciones por jubilación temprana para las personas que se jubilasen antes de cumplir 65 años serían relativamente pequeñas.

21. A los fines de la comparación, la Comisión Consultiva también solicitó información sobre las prestaciones de jubilación pagaderas a diversos funcionarios de la Secretaría y fuera de la Secretaría, en particular en las categorías de Secretario General Adjunto y Subsecretario General, así como el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión de Administración Pública Internacional, el Presidente de la Comisión Consultiva y los miembros de la Dependencia Común de Inspección. Se informó a la Comisión Consultiva de que todos los funcionarios mencionados estaban afiliados a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, que se había establecido con el propósito de fijar los niveles de tasas de sustitución correspondientes a un determinado período de servicio para el personal de carrera del Cuadro de Servicios Generales y del Cuadro Orgánico. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y Reglamentos de la Caja, los funcionarios aportaban un 7,9% de su remuneración pensionable, mientras que la Organización aportaba un 15,8%.

22. Se facilitó a la Comisión Consultiva, a petición de la misma, el siguiente cuadro en el que se indicaba la cuantía de las prestaciones de pensión que los funcionarios mencionados podían esperar percibir después de un período de aportación de nueve años.

Cuadro 4

**Cuantía de la prestación correspondiente a los funcionarios de la Secretaría y fuera de la Secretaría después de un período de aportación de nueve años**

<i>Categoría del funcionario</i>	<i>Prestación anual (en dólares EE.UU.)</i>
Secretario General Adjunto	42 880
Subsecretario General	39 633
Presidente/Vicepresidente de la Comisión de Administración Pública Internacional, Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto	40 548
Miembro de la Dependencia Común de Inspección	35 202

A preguntas de la Comisión Consultiva, se informó a la misma de que si se concediera a los futuros nuevos magistrados de la Corte una tasa de acumulación similar a la de los funcionarios con categoría de Secretario General Adjunto y Subsecretario General, es decir, el 14,5% después de nueve años de servicio, las obligaciones correspondientes a las prestaciones previstas para los nuevos magistrados en los próximos 30 años ascenderían a 8.402.998 dólares, lo cual representa una reducción de 21.432.107 dólares frente a las obligaciones previstas de 29.835.105 dólares en virtud del plan actual.

23. Con respecto al carácter del plan de pensiones a que se hace referencia en el párrafo anterior, basado en las aportaciones de los afiliados, la Comisión Consultiva recuerda que, como se indica en el párrafo 57 del informe del Secretario General, la



Asamblea General ha afirmado en repetidas ocasiones que las condiciones de servicio y la remuneración de los funcionarios de las Naciones Unidas que no forman parte de la Secretaría deben ser independientes y distintas de las de los funcionarios de la Secretaría. Además, como se indica en el párrafo 47 del informe, el hecho de que el sistema de pensiones de los miembros de la Corte sea un plan sin aportaciones de los afiliados es un principio mantenido durante largo tiempo, que ya estaba firmemente establecido en tiempo de la Sociedad de las Naciones y que la Asamblea ha reafirmado sistemáticamente desde aquel entonces.

24. También se facilitó a la Comisión Consultiva, a petición de la misma, la siguiente información sobre las prestaciones de pensión pagaderas actualmente a los magistrados de la Corte Penal Internacional.

<i>Fórmula de cálculo de las prestaciones</i>	<i>Edad normal de jubilación</i>	<i>Jubilación anticipada</i>		<i>Aportación del afiliado</i>	<i>Beneficios secundarios</i>		
		<i>Edad</i>	<i>Reducción</i>		<i>Disca-pacidad</i>	<i>Familiares supérstites</i>	<i>Hijos</i>
El 12,5% del sueldo básico neto anual de 237.170 dólares, que asciende a 29.645 dólares, prorrateado en función de periodos de servicio de menos de nueve años. No se pagan prestaciones de pensión adicionales después de los primeros nueve años de servicio.	60 años (con tres años de servicio)	En el momento de la separación	Reducción actuarial	No	Sí	Sí	Sí

Se informó a la Comisión de que el plan de pensiones de los magistrados de la Corte Penal Internacional se había modificado en 2007. Antes de esa fecha, los jubilados recibían una prestación anual que ascendía a 118.585 dólares, suma equivalente al 50% de su sueldo básico neto anual de 237.170 dólares. Esa suma se prorrateaba para contabilizar periodos de servicio de menos de nueve años. Se informó además a la Comisión de que, a fin de evitar cualquier infracción del Estatuto de la Corte, la Asamblea de los Estados Partes había decidido que el nuevo plan de pensiones solo se aplicaría a los nuevos magistrados, y que el plan anterior seguiría aplicándose a los magistrados en servicio activo y a los jubilados.

#### *Derechos de pensión adquiridos*

25. La Comisión Consultiva recuerda que la Asamblea General, en el párrafo 5 de su resolución 65/258, pidió específicamente al Secretario General que al proponer un mecanismo para determinar las prestaciones de jubilación de los miembros de la Corte Internacional de Justicia y los magistrados de los dos Tribunales, tuviera en cuenta los derechos de pensión adquiridos antes de prestar servicios en la Corte o en los Tribunales. El Secretario General aborda esta cuestión en los párrafos 36 a 40 de su informe, e indica, entre otras cosas, que dada la variedad de tipos y niveles de prestaciones proporcionados por los anteriores empleos y los regímenes de la

seguridad social, resulta difícil obtener una tasa uniforme de sustitución. Señala asimismo que la tasa de sustitución efectiva para un magistrado determinado dependerá en última instancia del nivel de acumulación de la pensión durante cada período de empleo anterior y de las prestaciones de la seguridad social adquiridas a lo largo de su vida laboral, y afirma que un plan de pensiones diseñado para tener en cuenta los empleos previos de los miembros de la Corte podría plantear problemas jurídicos y prácticos en su administración.

26. A preguntas de la Comisión Consultiva, se informó a la misma de que esos problemas jurídicos y prácticos guardaban relación con cuestiones de privacidad (tal vez no fuera apropiado preguntar a los miembros actuales de la Corte si habían invertido su dinero en el pasado a fin de acumular derechos de pensión y cómo lo habían hecho, y además sería imposible recabar esa información respecto de futuros magistrados) y con dificultades para obtener información sobre las prestaciones pagaderas a los interesados en virtud de sus respectivos planes de pensiones nacionales. También se informó a la Comisión de que un plan de pensiones que tuviera en cuenta prestaciones de pensión anteriores acumuladas por los miembros de la Corte a la hora de determinar sus derechos a una pensión de jubilación de la Corte podía ser complejo y entrañar gestiones administrativas adicionales.

27. Se explicó a la Comisión Consultiva, en respuesta a sus preguntas, que el actual plan de pensiones para los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales incorporaba una rápida acumulación de prestaciones durante los primeros nueve años de servicio (del 5,56% anual) porque, hasta la fecha, ser miembro de la Corte y, por ende, de los Tribunales, se consideraba una carrera nueva y autónoma. En efecto, la Comisión observa que en el párrafo 40 del informe del Secretario General se indica que en 1995 la opinión del entonces Secretario General era que la experiencia laboral previa de los miembros de la Corte no se debía tomar en consideración para determinar el nivel de sustitución de ingresos de sus pensiones. (A/C.5/50/18, párrs. 25 a 28 y anexo).

28. Se informó además a la Comisión Consultiva que, a fin de dar respuesta a la solicitud de la Asamblea General contenida en su resolución 65/258, en el plan de pensiones de prestaciones definidas recomendado por el Secretario General (la opción A) no se tenía en cuenta la posibilidad de que los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales hubieran tenido carreras anteriores y hubieran adquirido derechos de pensión. Por consiguiente, en el párrafo 36 del informe del Secretario General se indica que las prestaciones de pensión deben determinarse partiendo del supuesto de que los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales han prestado servicios a lo largo de 35 años de carrera. A fin de garantizar el objetivo de una tasa de sustitución del 80% del sueldo final, se necesitaría una tasa anual de acumulación de prestaciones entre el 1,86% y el 1,71%. Se informó a la Comisión de que, en esas circunstancias, la tasa de acumulación actual aplicable a los magistrados, que era del 5,56% durante los primeros nueve años, podría considerarse excesiva. En el párrafo 37 del informe del Secretario General se indica que es posible admitir un cierto ajuste en la tasa de acumulación para reflejar la pérdida de prestaciones que puede sufrir un magistrado al abandonar su empleo anterior sin que se apliquen plenamente los máximos niveles salariales para determinar las prestaciones de la pensión del anterior empleo. En tal caso, según el Secretario General, una tasa de acumulación entre el 2,42% y el 2,22% podía considerarse razonable para alcanzar el objetivo global de una tasa de sustitución del 80% para 35 años de carrera. Se señaló a la Comisión que, a ese

respecto, la opción recomendada por el Secretario General era más generosa que la del mecanismo descrito en los párrafos 36 y 37 de su informe, ya que incorporaba una tasa de acumulación lineal del 3,7 % anual durante 18 años.

## **V. Conclusiones y recomendaciones**

29. La Comisión Consultiva, tras haber examinado el informe del Secretario General, así como la información adicional que se le proporcionó, recomienda que la Asamblea General haga suya la recomendación del Secretario General de establecer por un plan de pensiones de prestaciones definidas (la opción A) con un sistema de acumulación lineal del 3,7% anual durante 18 años y nada en años subsiguientes. En opinión de la Comisión, el cambio en la situación actual está justificado porque en la opción A se tienen en cuenta en cierta medida los derechos de pensión adquiridos. La Comisión también está a favor de la opción A porque respeta el carácter del plan, mantenido durante largo tiempo, sin aportaciones de los afiliados. Puesto que, como rezan el párrafo 5 del artículo 32 del Estatuto de la Corte y los artículos 13 *bis* y 12 *bis* de los estatutos del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, respectivamente, los sueldos, estipendios y remuneraciones de los miembros de la Corte y los magistrados de los Tribunales no podrán ser disminuidos durante el período del cargo, la Comisión está de acuerdo con el Secretario General en que las nuevas disposiciones deben ser aplicables únicamente a nuevos miembros de la Corte y a nuevos magistrados de los Tribunales, según proceda.

30. Como se indica en el párrafo anterior, en el plan de pensiones recomendado por el Secretario General se tienen en cuenta en cierta medida los derechos de pensión adquiridos antes de prestar servicios en la Corte o en los Tribunales a la hora de determinar la cuantía de las prestaciones de jubilación. En opinión de la Comisión Consultiva, este enfoque no deja de ser razonable, en particular si se tiene en cuenta que la carrera anterior de los interesados es un factor clave para determinar su competencia para el cargo. La Comisión considera que esta cuestión debería haberse analizado con mayor detalle en el informe del Secretario General. Tal vez la Asamblea General desee solicitar al Secretario General que siga examinando esta cuestión y que la informe al respecto en su sexagésimo octavo período de sesiones, en el contexto del próximo examen amplio.